

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO:	EJECUTIVO
RADICADO No.:	11001-33-35-029-2022-00168 00
EJECUTANTE:	FIDUCIA LA PREVISORA S.A. – COMO VOCERA DEL PAP FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURÍDICA EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS Y SU FONDO ROTATORIO
EJECUTADO:	VIVIANA ALEJANDRA GAONA CARABALDO

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición, interpuesto por la apoderada judicial de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como vocera del PAP FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURÍDICA EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS Y SU FONDO ROTATORIO, contra del auto de fecha 10 de noviembre de 2022, por medio del cual se rechazó la demanda ejecutiva de la referencia por falta de competencia.

I. ANTECEDENTES

✓ Fundamentos del recurso

Como fundamento de los recursos formulados, la apoderada judicial de la parte ejecutante aduce que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia de unificación de fecha 25 de julio de 2017, proferida dentro del radicado 11001-03-25-000-2014-01534-00(4935-14), con ponencia del consejero William Hernández Gómez, luego de un extenso análisis de las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, sobre competencia, concluyó que en materia de procesos ejecutivos derivados de sentencias dictadas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el factor que determina la misma es el de conexidad, por lo tanto, *“...la ejecución debe tramitarla el juez que conoció el proceso en primera instancia, así este no haya proferido la sentencia de condena; lo anterior, con el fin de preservar los objetivos perseguidos con el factor de conexidad”*.

II. CONSIDERACIONES

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula la procedencia de recursos contra las decisiones proferidas en el trámite de los procesos, y en materia del recurso de reposición establece:

*“**Artículo 242. Reposición.** El recurso de reposición **procede contra todos los autos**, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso”.*

En virtud de lo anterior, el artículo 318 del Código General del Proceso en su Inciso 3°, precisa lo siguiente:

“El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie del auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto”. (Subrayado fuera del texto)

De conformidad con lo expuesto, se tiene que el recurso debe interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto y, teniendo en cuenta que el auto recurrido que notificado por estado el 11 de noviembre de 2022, la parte actora tenía hasta el 17 de noviembre de 2022 para presentar el recurso de Reposición y dado que el mismo fue interpuesto el **17 de noviembre de 2022**, se encuentra dentro del término establecido para tal fin; razón por la cual, procede esta sede judicial a resolver lo pertinente.

Descendiendo al caso bajo estudio, tenemos que frente a los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto, este Despacho reitera que, si bien es cierto, el numeral 6º del artículo 104 del CPACA, establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es competente para conocer de los procesos ejecutivos que se deriven de condenas impuestas por la jurisdicción administrativa, también lo es que, dicha competencia aplica sólo cuando se persiga la ejecución de condenas impuestas a una entidad pública o particulares que ejerzan función administrativa.

Lo anterior, en razón a que en el evento en que se persiga la ejecución de las condenas impuestas por la jurisdicción administrativa a particulares, se deberá dar aplicación al art. 12 de la Ley 270 de 1996, que prevé que la jurisdicción ordinaria conoce de todos los asuntos que no estén asignados a otra jurisdicción. Y el artículo 422 del Código General de Proceso, el cual prevé que:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley”.

Criterio que fue acogido por la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto No. 857 del 27 de octubre de 2021, en el que dirimió un conflicto de competencia negativo suscitado entre el Juzgado 16 Civil Municipal de Oralidad de Medellín y el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Medellín, sostuvo:

*“(…) la Corte coincide con la interpretación referida del Consejo de Estado y se aparta de la postura fijada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior porque una lectura armónica de los artículos 104.6 y 297 del CPACA, deja claro que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce los procesos ejecutivos derivados de: i) condenas impuestas por la jurisdicción, ii) conciliaciones aprobadas por la jurisdicción, iii) laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública y iv) contratos celebrados con entidades estatales. Asimismo, el artículo 297 del CPACA establece que se consideran títulos ejecutivos las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. También se considera como título ejecutivo cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva. Así las cosas, **escapa al conocimiento de dicha jurisdicción la ejecución de condenas impuestas -como ocurre en este caso-a los particulares”.***

Así las cosas, no encuentra este despacho razones suficientes para revocar el auto del 10 de noviembre de 2022, providencia mediante la cual se rechazó la demanda ejecutiva de la referencia.

En consecuencia, dada la negativa de reponer la decisión censurada y teniendo en cuenta contra la misma se interpuso de manera subsidiaria el recurso de apelación, de conformidad con el numeral 1º del artículo 243 del CPACA, se concederá en efecto suspensivo el recurso de alzada contra el auto del 11 de agosto de 2020, mediante el cual se rechazó la demanda ejecutiva.

Por otra parte, **se le acepta renuncia del poder** solicitada por la doctora **Patricia Gómez Forero**, como apoderada de la parte ejecutante, de acuerdo al memorial obrante en el Archivo 08 del Exp. Digital.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto emitido el 10 de noviembre de 2022, por medio de la cual se rechazó la demanda ejecutiva de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER en efecto suspensivo el recurso de **APELACIÓN** formulado de manera subsidiaria por la parte ejecutante.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia remítase, por Secretaría el expediente de la referencia al Superior para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR

JUEZ

RYGH

**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior
Hoy 14 de abril de 2023 a las 8:00 a.m.

Partes:	Dirección electrónica:
Parte Ejecutante:	papextintodas@fiduprevisora.com.co patriciagomez_13@hotmail.com
Parte Ejecutada:	Nesc19@hotmail.com
Ministerio Público: Procuraduría 191 Judicial I Para Asuntos Administrativos	procjudadm191@procuraduria.gov.co